

Fecha 22.11.2008	Sección Primera-Opinión	Página 20
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

JOSÉ LUIS
VALDÉS UGALDE
**La inseguridad
de un Estado
fracturado**

Es ciertamente trágica la muerte de Juan Camilo Mouriño. Lo es por la pérdida de la vida de un joven político, por la partida del padre de tres niños pequeños, porque, por primera vez en la historia moderna del Estado mexicano, el segundo hombre de importancia del poder público muere y lo hace trágicamente. Pero, sobre todo, lo es porque de su muerte se desprenden grandes incógnitas sobre la seguridad del Estado y de la nación que no debiéramos pasar por alto en un momento de enorme fragilidad institucional y social. Independientemente de la razón que provocara este accidente, la caída del avión de Mouriño abre un gran boquete en el aparato de seguridad del Estado. Pero, sobre todo, si el accidente fue por errores humanos, como parece apuntar la indagatoria oficial, las razones son todavía más prosaicas. Se trataría de un hecho inédito, el que incluso a los más altos niveles del Estado no se tengan mecanismos de prevención ni control elementales acerca de la categoría ni profesionalismo de los empleados al servicio del gobierno. En este caso, de los pilotos a quienes las últimas investigaciones señalan como responsables principales, cuando no improvisados, de la tragedia. ¿Qué habrá de esperar de los cocineros, choferes, guardaespaldas, personal de servicio doméstico y demás empleados que atienden directamente al Presidente y a otros colaboradores de su entorno cercano? Dado este vacío sistémico e ineficacia creciente, ¿debemos esperar, como en la antigua Roma, a que suceda el envenenamiento de un alto mando del Estado para responder en consecuencia?

El grado de fragilidad que enfrentamos es lamentable. Es alarmante el alto nivel de improvisación e incoherencia en que está sumida la vida del Estado mexicano. Por un lado, tenemos las grandes inconsistencias técnicas, procedimentales, políticas y de manejo de la opinión pública que se han puesto en evidencia tras el trágico accidente y, en consecuencia, la enorme amenaza que esto representa para la vida social y política de este país. Y, por el otro, se nota cada vez más la ausencia de un actor racional que con-

duzca los destinos más elementales de la burocracia central y de otros espacios de la administración pública; no se diga, desde luego, del rumbo y contenido de la política nacional al más alto nivel de las relaciones entre poderes y de las estrategias para contener las amenazas policéntricas más serias a la seguridad nacional como la del narcotráfico, por mencionar sólo una de las más urgentes. Pero se trata de un nivel de ineficacia y de un diletantismo de Estado que en su progresión nos muestra una penosa verdad de nuestra transición democrática. Ocurre que del tránsito de un régimen semiautoritario, cuyo eje decisional era vertical y antidemocrático, se pasó a la administración de un Estado que ha quedado relativamente fuera de control. En 2001 el gobierno de una transición democrática reventada desde Bucareli y Los Pinos y que heredó la cosa pública, dejó que el Estado se desgranara y se fragmentara en mil pedazos sin saber bien a bien qué hacer con él ni dónde poner cada una de las piezas desgajadas que fue desparramando por doquier.

Así, el Estado mexicano es hoy uno sin organicidad y con serios problemas de motricidad. Sufre un quebranto enorme que se pone de manifiesto ante la terrible evidencia de la violencia que lo rodea, la que no está del todo claro que era competente para afrontar en virtud de su débil arquitectura institucional endógena. Mouriño ha sido la más reciente víctima de trascendencia de esta decadencia y atrofia estatales, de esta inseguridad integral que lacerará la vida nacional. También lo han sido las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. Y, de pasada, lo están siendo la sociedad mexicana y las generaciones del futuro cercano que a este paso heredarán las ruinas de una patria desolada. ¿Se puede pretender seguir por el mismo camino en la defensa de la seguridad nacional sin emprender un rediseño completo de la arquitectura institucional del Estado mexicano? La respuesta del gobierno no puede hacerse esperar; sobre todo si quiere seguir siendo el gobierno de un Estado soberano.

jvaldesugalde@gmail.com

